

Naciones Unidas
**ASAMBLEA
GENERAL**



TERCERA COMISION, 748a.
SESION

*Jueves 31 de enero de 1957,
a las 10.45 horas*

UNDECIMO PERIODO DE SESIONES

Documentos Oficiales

Nueva York

SUMARIO

Página

Tema 31 del programa:

Proyectos de pactos internacionales de derechos humanos (*conclusión*)

Artículo 13 del proyecto de pacto de derechos económicos, sociales y culturales (*conclusión*)..... 341

Tema 60 del programa:

Medidas provisionales que deberían adoptarse en espera de la entrada en vigor de los pactos de derechos humanos, con respecto a la violación de los derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (*continuación*) 341

Presidente: Sr. Hermod LANNUNG (Dinamarca).

TEMA 31 DEL PROGRAMA

Proyectos de pactos internacionales de derechos humanos (E/2573, anexos I, II y III, A/2907, y Add.1 y 2, A/2910 y Add.1 a 6, A/2929, A/3077, A/C.3/L.460, A/3149, A/C.3/L.528, A/C.3/L.532) (*conclusión*)

ARTÍCULO 13 DEL PROYECTO DE PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (E/2573, ANEXO I A) (*conclusión*)

1. El Sr. MACCHIA (Italia) lamenta que fuera rechazada la enmienda de Italia y Uruguay (A/C.3/L.590/Rev.1) a pesar de que casi todas las delegaciones se habían pronunciado a favor de los principios en ella enunciados. La delegación italiana no votó en contra del artículo, que considera incompleto, y se contentó con abstenerse porque espera que esos principios puedan incorporarse al pacto cuando se proceda al examen de su parte II, es decir, de los artículos 2 a 5.

2. El Sr. BRENA (Uruguay) manifiesta que votó a favor del texto del artículo 13 propuesto por Afganistán y Filipinas (A/C.3/L.589), de la misma manera que hubiera apoyado el texto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos (E/2573, anexo I A). Lamenta que en el curso del debate se hubiera deformado el propósito de la enmienda presentada por Italia y Uruguay (A/C.3/L.590/Rev.1), y que tendía únicamente a defender un derecho inalienable de la persona humana. Espera presentar de nuevo una propuesta análoga en el momento oportuno.

3. El Sr. HAMILTON (Australia) votó a favor del texto del artículo, sin perjuicio de las reservas que había hecho antes de la votación. Espera que por lo menos algunos de los principios en que se inspiraba la enmienda de Italia y Uruguay sean considerados de nuevo cuando se examine la parte II del pacto.

4. La delegación de Australia hace suyas las observaciones y reservas formuladas por la delegación del Canadá (747a. sesión) en relación con la cláusula federal. Australia sólo podrá ser parte en el pacto si

éste contiene una cláusula de tal tipo que sea satisfactoria.

5. El Sr. TALAAT (Egipto) declara que la delegación egipcia estaba dispuesta a votar en favor del texto preparado por la Comisión de Derechos Humanos. El hecho de no haber participado en el debate no se debe a falta de interés, sino a estimar que hay que reducir al mínimo las intervenciones y las enmiendas, a fin de que la Comisión pueda llevar a término, sin demasiadas dilaciones, la elaboración de los pactos.

6. La delegación de Egipto votó a favor del texto propuesto en las enmiendas del Afganistán y Filipinas (A/C.3/L.589), modificado por las enmiendas de Bélgica (A/C.3/L.593) y de Polonia (A/C.3/L.591), que completan muy acertadamente el texto. Se felicita de que se haya evitado, en el párrafo 1, el peligro de las definiciones inútiles. Pese a la validez de los principios en ella enunciados, la delegación de Egipto debió votar contra la enmienda de Italia y Uruguay (A/C.3/L.590/Rev.1), por parecerle que el texto propuesto estaba fuera de lugar en el artículo 13.

7. El Sr. MOROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) votó a favor del artículo, ya que, aunque no es perfecto, representa un común denominador aceptable. El Sr. Morósov lo interpreta en el sentido de que impone al Estado la obligación de crear condiciones adecuadas para asegurar a todos la atención que necesitan, y de prodigar atención gratuita a quienes no están en condiciones de sufragar los gastos de ello. La delegación de la URSS votó en contra de la enmienda de Italia y Uruguay (A/C.3/L.590/Rev.1) por estimar que las ideas que contiene no había que examinarlas en relación con el artículo 13 del proyecto de pacto de derechos económicos, sociales y culturales (E/2573, anexo I A), sino más bien en relación con el artículo 7 del proyecto de pacto de derechos civiles y políticos (E/2573, anexo I B). El Sr. Morósov no comparte el pesimismo de algunos representantes y piensa que la Comisión podría muy bien terminar el examen de los pactos en dos períodos de sesiones. Hay que actuar de prisa si no se quiere causar un perjuicio irreparable a los pactos.

TEMA 60 DEL PROGRAMA

Medidas provisionales que deberían adoptarse en espera de la entrada en vigor de los pactos de derechos humanos, con respecto a la violación de los derechos humanos enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (A/3187 y Add.1, A/C.3/L.592, A/C.3/L.594) (*continuación*)*

8. La Sra. LORD (Estados Unidos) reconoce que la Carta y la Declaración Universal de Derechos Humanos imponen a las Naciones Unidas la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos y de las liber-

* Reanudación de los trabajos de la 745a. sesión.

tades fundamentales, derechos y libertades contra los que desgraciadamente se atenta muy a menudo. Comprende pues la preocupación que ha impulsado a la delegación de Grecia a presentar su proyecto de resolución (A/C.3/L.592).

9. La delegación de los Estados Unidos comparte esta preocupación y ya en el noveno período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en 1953, propuso un programa de acción en materia de derechos humanos que fué aprobado y cuya aplicación ha comenzado ya. La Sra. Lord señala, por ejemplo, que dentro del programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos aprobado por la Asamblea General en 1955 (resolución 926 (X)), se celebró en Ginebra en agosto de 1956 un seminario sobre libertad de información, y en el otoño de 1957 se realizará en Bangkok un seminario sobre la participación de la mujer en las funciones públicas. Conviene subrayar también la importancia de la obra realizada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías que ha emprendido toda una serie de estudios sobre la discriminación en materia de empleo, enseñanza, religión y derechos políticos.

10. En lo que respecta a la propuesta de Grecia, la representante de los Estados Unidos se pregunta si sería acertado confiar a la Comisión de Derechos Humanos una tarea que la distraería de sus trabajos actuales y la orientaría inevitablemente hacia cuestiones políticas y jurídicas que no son de su competencia. Hasta ahora, las quejas de cualquier Estado Miembro contra otro Estado Miembro por violación de las obligaciones internacionales han sido planteadas ante la Corte Internacional de Justicia. La creación del comité previsto en el proyecto de Grecia suscitaría sin duda alguna debates prolongados e inútiles sobre la admisibilidad de las denuncias presentadas por particulares. Se ha dicho ya muchas veces, tanto en la Tercera Comisión como en la Comisión de Derechos Humanos, que esas denuncias no deberían ser admisibles. La Sra. Lord no ignora que en la resolución propuesta por Grecia no se hace sino invitar a la Comisión de Derechos Humanos a que estudie una "posibilidad". Pero cree poco conveniente que se plantee tal cuestión a la Comisión de Derechos Humanos, especialmente si se tiene en cuenta que los trabajos del comité previsto constituirían ciertamente una duplicación de los de otros órganos de las Naciones Unidas; deberá, pues, votar en contra del proyecto presentado por Grecia.

11. El Sr. SAGAZ (España) piensa, como el representante de Grecia, que el mantenimiento de la paz está íntimamente ligado al respeto de los derechos de la persona humana. Aunque esos derechos han sido enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, no existe todavía el mecanismo que impida la violación de tales derechos. Por otra parte, la entrada en vigor de los pactos evidentemente está aún lejos. La delegación española se interesa, pues, vivamente en la propuesta de Grecia (A/C.3/L.592).

12. Sin embargo, el Sr. Sagaz desearía que se precisasen ciertos puntos, y se permitirá formular algunas preguntas al representante de Grecia. En primer lugar, ¿es factible que la reclamación de un Estado Miembro contra otro Estado Miembro pueda estar completamente desprovista de todo matiz político? En segundo lugar, ¿con qué reglas se mediría la gravedad de la violación? En tercer lugar, ¿cuántos miembros tendría el comité previsto, cómo se nombraría y cómo se conseguiría que sus miembros no tuviesen carácter político?

En cuarto lugar, podría ocurrir que las reclamaciones presentadas no se refirieran en todos los casos a violaciones colectivas de derechos humanos y que un Estado formulase una reclamación en nombre de uno de sus nacionales. El comité se transformaría así en un tribunal mundial supremo de jurisdicción amplísima, y además gratuito. ¿Ha pensado el representante de Grecia en el número y la variedad de reclamaciones que podrían presentarse cada año? En quinto lugar, ¿no cree la delegación de Grecia que el Estado acusado se apresuraría a alegar violaciones por parte del Estado denunciante, con lo cual en vez de restablecerse el equilibrio jurídico perturbado se produciría una confusión sin precedentes? En sexto lugar, ¿no cree también la delegación griega que dicho comité tendría grandes dificultades en su trabajo por no poder apoyarse en las disposiciones de los pactos, especialmente las que han de definir las consecuencias de la violación de los derechos humanos, y que un simple informe de dicho comité no bastaría para restablecer el orden jurídico?

13. El Sr. BRENA (Uruguay) subraya la gran importancia del problema planteado en el proyecto de resolución de Grecia (A/C.3/L.592). De poco servirían, en efecto, los principios generales enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos de derechos humanos si no se adoptasen medidas con miras a asegurar su aplicación. El representante del Uruguay comparte enteramente a este respecto la actitud del representante de Grecia y recuerda que su delegación presentó en 1951 una propuesta sobre la misma cuestión¹, que la Comisión podría examinar al mismo tiempo que la propuesta griega. Aunque el fin perseguido es el mismo, Grecia y el Uruguay enfocan el problema desde ángulos diferentes. Para el Uruguay, la cuestión está relacionada con dos conceptos de derecho internacional: el de la soberanía absoluta de los Estados y el del individuo en cuanto sujeto del derecho internacional. Evidentemente, el primer principio ya no es válido. Los Estados partes en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y los que han suscrito la Carta de las Naciones Unidas han reconocido que en la práctica podrían establecerse limitaciones a su soberanía nacional. Por lo demás, la labor de varios órganos de las Naciones Unidas consiste, en gran parte, en señalar normas supranacionales que los Estados se obligan a observar. Si bien es cierto que el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta estipula que las Naciones Unidas no pueden intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, no por ello éstos se encuentran menos obligados a observar las disposiciones relativas al respeto de los derechos humanos. El principio de la soberanía absoluta de los Estados no está, pues, a tono con la Carta ni con las convenciones elaboradas por los órganos de las Naciones Unidas.

14. Sin dejar de velar por el respeto de su independencia, el Uruguay ha sostenido siempre la primacía del derecho internacional sobre el derecho nacional. El Sr. Brena cita a este respecto el caso de una quiebra declarada en su país que afectó a determinados depositantes extrajeros. La Corte Suprema del Uruguay resolvió que las leyes uruguayas no se aplicaban a dichos depositantes, a los cuales se les reintegró completamente el importe de sus créditos, contrariamente a lo ocurrido con los uruguayos víctimas de dicha suspensión de pagos.

¹ Véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social*, 13° período de sesiones, Suplemento No. 9, anexo VII.

15. Cuando se trata de definir quiénes son los sujetos del derecho internacional caben tres posiciones. Se puede estimar que sólo los Estados son sujetos del derecho internacional, que se puede reconocer esta calidad tanto a los Estados como a los individuos o, incluso, que sólo los individuos entran en la categoría de referencia. Esta tesis ha sido defendida por gran número de juristas eminentes. En efecto, el objeto de las Naciones Unidas no es evidentemente proteger al Estado contra el individuo, sino proteger al individuo, a la persona humana, cuyos derechos se trata de garantizar en todo el articulado de los dos pactos de derechos humanos. Esta tesis está por lo demás implícitamente admitida en la jurisprudencia, ya que los individuos tienen la obligación de respetar las normas del derecho internacional.

16. Si el individuo es el sujeto del derecho internacional, es natural que los derechos que se le renocen no queden en letra muerta. Sin embargo, hasta ahora ningún órgano de las Naciones Unidas se ha encargado de defenderlos, y los hechos citados por el representante de Grecia (745a. sesión) a propósito de Chipre no tienen nada de sorprendentes. Como ha señalado un eminente jurista, el Sr. René Brunet, ningún texto de las Naciones Unidas menciona la posibilidad de investir de tal mandato a la Comisión de Derechos Humanos. Se pensó alguna vez, en el Consejo Económico y Social, en crear un órgano internacional de control encargado de asegurar el respeto de los derechos humanos, pero esta idea no prosperó. Pero, como dice tan atinadamente el Sr. Brunet, para garantizar eficazmente el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, se debe conceder a sus beneficiarios la facultad de recurrir ante una jurisdicción internacional. Esta posibilidad fué ya prevista al instituirse el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya. En 1946 se propuso la creación de un órgano europeo encargado de la protección de los derechos humanos y de las minorías. Por último, ciertos juristas, entre ellos el Sr. Albert de Lapradelle, han estimado que se debía permitir que los particulares recurrieran a la Corte Internacional de Justicia. Es inadmisibles en efecto, que un individuo cuyos derechos han sido violados no pueda constituirse en parte ante un tribunal. La posición del Uruguay se aparta en este punto de la que parece haber adoptado Grecia, pues en la propuesta de este país sólo se mencionan las posibles quejas de los Estados. Desde 1953 hasta 1956, las Naciones Unidas recibieron unas 46.000 comunicaciones relativas a los derechos humanos. Posteriormente, el número de ellas ha disminuído y es de temer que los particulares pierdan pronto confianza en una organización que no ha sabido defender los derechos que les reconoce solemnemente. No cabe concebir, en el plano práctico, que el individuo lesionado en sus derechos por su propio Estado le vaya a pedir a éste que le sirva de intermediario ante las Naciones Unidas, ni que un particular se dirija a otro Estado más poderoso, pues éste naturalmente vacilaría en comprometer sus relaciones internacionales al encargarse de defenderlo.

17. En vista de ello, ¿a quién puede confiarse la tarea de garantizar el respeto de los derechos humanos? Es evidente que la Comisión de Derechos Humanos no podría tomar sobre sí una carga tan pesada. La mejor solución sería, pues, investir a un Alto Comisionado de este mandato o crear un órgano especial compuesto de juristas. Este órgano clasificaría las comunicaciones según la gravedad de la violación, haría las indagaciones necesarias para determinar lo fundado de la reclama-

ción, celebraría consultas con los Estados interesados y, de demostrarse efectivamente un caso de violación, plantearía la acusación ante la Comisión de Derechos Humanos. El procedimiento adoptado sería, pues, análogo al seguido ante los tribunales. Un órgano de este género sería especialmente útil en el caso de los apátridas, que no cuentan con la protección de ningún Estado.

18. Para terminar, el representante del Uruguay cita el ejemplo del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, el cual posee atribuciones análogas a las que podrían conferirse al órgano previsto. Este Comité examina las denuncias presentadas por organizaciones sindicales y por los Estados, y en algunos casos ha condenado a los Estados por infringir la libertad sindical. La creación de dicho Comité ha representado un progreso en el plano internacional; se trata de un precedente interesante, que merecería ser seguido.

19. El Sr. SAARIO (Finlandia) apoya plenamente el principio en que se inspira el proyecto de resolución de Grecia (A/C.3/L.592). Las pequeñas naciones como Finlandia tienen un interés muy especial en que los derechos humanos sean efectivamente respetados. El Sr. Saario se pregunta sin embargo si la adopción del citado proyecto permitiría alcanzar el fin deseado y si la creación del comité propuesto sería verdaderamente útil. Por lo demás, difícilmente se podrá encomendar a la Comisión de Derechos Humanos la tarea prevista.

20. El Sr. BARODY (Arabia Saudita) declara que antes de tomar una posición en cuanto al proyecto de resolución de Grecia (A/C.3/L.592) su delegación necesita obtener algunas aclaraciones suplementarias. Esa propuesta plantea en efecto problemas importantes, que no parece resolver muy claramente.

21. Conviene señalar que el texto prevé el caso de queja de un Estado Miembro contra otro Estado Miembro. La idea no es nueva, ya que las Naciones Unidas han tenido ocasión de examinar a menudo quejas de ese tipo. Puede incluso decirse que la mayor parte de las controversias se presentan en la forma de quejas formuladas por un Estado contra otro. Pero hasta la fecha la Organización se ha ocupado esencialmente de los casos susceptibles de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por ello, ha remitido el examen de esas cuestiones al Consejo de Seguridad o a las comisiones políticas de la Asamblea General. La Tercera Comisión sólo ha estudiado esos casos en dos oportunidades: en la primera trató del trabajo forzoso y en la segunda, del destino de los prisioneros de guerra; por lo demás, no llegó a ningún resultado tangible.

22. Grecia desea introducir un elemento nuevo, por cuanto propone un procedimiento que se aplicaría incluso en los casos en que no esté en peligro la paz mundial. Es sin duda muy natural que se procure impedir las violaciones de los derechos humanos en espera de la entrada en vigor de los pactos, pero es difícil determinar cuál sería el método más eficaz para lograr ese fin. Si se encarga a la Comisión de Derechos Humanos que examine las quejas, es de temer que no disponga del tiempo necesario para ese examen o que éste dé lugar a debates enconados. En lo que se refiere al comité propuesto, sus conclusiones probablemente tendrían que ser examinadas por la Asamblea General; se volvería a tropezar así con las dificultades que el representante de Grecia ha señalado (745a. sesión) al presentar su propuesta. Se podría confiar a un órgano distinto, por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, la tarea de estudiar las quejas relativas a violaciones

de derechos humanos. Pero la Corte Internacional de Justicia, que se rige por textos muy estrictos, examina los litigios que se le remiten únicamente desde el punto de vista jurídico y nunca desde el punto de vista humanitario. La Corte, aunque se considerara competente, lo que no es seguro, no contaría con los medios prácticos para poner remedio a las situaciones que se le planteasen.

23. El proyecto de resolución de Grecia (A/C.3/L.592), además de plantear dificultades en lo que se refiere al mecanismo que conviene utilizar, peca igualmente de cierta falta de precisión en otros aspectos. Cabe preguntarse, en efecto, cuál sería la naturaleza de las quejas que habrían de examinar eventualmente la Comisión de Derechos Humanos y el comité. El representante de Arabia Saudita cree que la parte dispositiva del proyecto prevé las violaciones del derecho de los pueblos a la libre determinación. No hay que olvidar que la Asamblea General ha reconocido la importancia particular de ese derecho y ha pedido que se haga figurar en los pactos un artículo sobre la libre determinación (resolución 545 (VI)). Por otra parte, si se admitiera la posibilidad de que se formularan quejas contra los Estados por violación de otros derechos que no fueran el de la libre determinación de los pueblos, se correría el peligro de crear la mayor confusión y dejar el campo libre a los agentes provocadores, lo que sería muy peligroso. Debe, pues, evitarse todo equívoco. La delegación de Arabia Saudita, deseosa de defender a todos los pueblos que luchan por su libertad, tendrá muy en cuenta la respuesta que se le dé sobre este punto para determinar cuál ha de ser su posición definitiva.

24. El Sr. LIMA (El Salvador) recuerda que no se puede obligar a los Estados a comparecer ante una jurisdicción internacional sin que se hayan agotado previamente todos los recursos internos. El proyecto de resolución de Grecia (A/C.3/L.592) podría tener esa consecuencia peligrosa, contraria al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Es preciso que cualquier organismo que se cree para velar por la efectividad de los derechos, especialmente los derechos políticos, respete la soberanía de los Estados.

25. La delegación de El Salvador desearía que se le aclarara el alcance exacto de la propuesta griega. A su juicio, el texto debiera interpretarse en el sentido de que no impone en modo alguno a la Comisión de Derechos Humanos la obligación de crear un comité encargado de examinar las quejas. Dicha Comisión quedaría en libertad de tomar la decisión que considerase más conveniente; sólo en caso de que creyera necesario instituir un comité habrían de fijarse las atribuciones del mismo.

26. El Sr. EUSTATHIADES (Grecia), respondiendo a las diversas preguntas que se le han hecho, señala en primer lugar que la delegación de Grecia ha evitado deliberadamente dar al preámbulo de su proyecto de resolución (A/C.3/L.592) un carácter demasiado teórico. Aunque el texto del mismo tenga en la doctrina fundamentos sólidos, la delegación de Grecia ha preferido no recargarlo con la exposición de ideas generales. Por lo demás, como nadie se ha pronunciado en contra del preámbulo, parece que cabe llegar a la conclusión de que todas las delegaciones reconocen la necesidad de adoptar las medidas provisionales adecuadas para asegurar la observancia de los derechos humanos, en espera de que entren en vigor los pactos.

27. Tal es, en especial, el caso de la delegación de los Estados Unidos que se ha declarado de acuerdo en la

necesidad de estudiar el problema de las medidas contra las violaciones de los derechos humanos, y ha reconocido además que se cometen esas violaciones en distintas partes del mundo. Esa delegación ha subrayado que se han logrado progresos manifiestos en lo que respecta a la aplicación de los derechos, señalando en ese sentido algunos precedentes que constituyen a su juicio una evolución de importancia. Pero esos esfuerzos han consistido en preparar estudios precisamente para evitar tener que hacer frente al problema de las medidas que deben adoptarse. Se trata de informes que en un principio debían ser presentados anualmente y que ahora lo son cada tres años, y de estudios sobre derechos bien determinados como el derecho en virtud del cual nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. En este caso habrá que esperar tres años para que se dé simplemente cima al estudio de un solo artículo de la Declaración. Difícilmente cabe considerar esos estudios como algo más que una oportunidad para dar trabajo a la Comisión de Derechos Humanos, que tantas esperanzas había inspirado a la humanidad y que de lo contrario terminaría por desaparecer. Se ha dicho también que dicha Comisión no podría tratar, por falta de tiempo, la cuestión planteada por Grecia. Pero esa objeción no resulta válida puesto que se ha reconocido que esa cuestión no tiene menos importancia que otras que examina dicha Comisión. Otra objeción, formulada por la delegación de Estados Unidos y compartida por lo menos por otra delegación, es la de que no podrían despojarse de todo matiz político las reclamaciones relativas a violaciones de derechos humanos, ni se podrían evitar debates políticos en la Comisión de Derechos Humanos. Es cierto, como atestigua toda la historia del derecho internacional relativa a los procedimientos de arreglo pacífico, que los límites entre la política y el derecho son sumamente difíciles de demarcar y que toda cuestión jurídica o humanitaria tiene un aspecto político. Pero no es menos cierto que se debe evitar que una cuestión jurídica o humanitaria degeneren necesariamente en una cuestión puramente política. La Comisión de Derechos Humanos, el comité propuesto o cualquier otro órgano que se cree, estarían en mejores condiciones de lograrlo que las Comisiones políticas de la Asamblea General, donde es casi fatal que se dé un carácter político a las cuestiones humanitarias.

28. Por ello, el Sr. Eustathiades ha prestado particular atención a las preguntas más concretas hechas por el representante de España, con quien por otra parte está de acuerdo en cuanto al tiempo necesario para la entrada en vigor de los pactos, período que obliga a hacer algo en el intervalo.

29. El representante de España ha preguntado cómo se mediría la gravedad de las violaciones. La delegación de Grecia cree que el mecanismo previsto no debe ponerse en funcionamiento sino en los casos de violaciones más graves, y especialmente aquéllas de que son víctimas grupos étnicos o religiosos enteros. La interpretación del representante de Arabia Saudita es pues absolutamente exacta: se trata efectivamente, en el ánimo de Grecia, de proteger a los grupos que luchan por su libertad y a los que se niega el goce de todos los derechos. Es natural que se piense en los casos de colonialismo, cuando la lucha por la libertad y la independencia se paga con violaciones de los derechos humanos, realizadas en gran escala. El órgano encargado de examinar las violaciones determinaría también el criterio de gravedad. La Tercera Comisión, por su parte, no tiene por qué entrar en detalles sobre el particular.

30. Respondiendo a otra pregunta del representante de España, el Sr. Eustathiades manifiesta que no es a la Tercera Comisión a la que incumbe precisar el número de miembros que integrarían el comité propuesto en el proyecto de resolución de Grecia. Esa tarea correspondería naturalmente a la Comisión de Derechos Humanos, si la misma estimase conveniente crear el comité.

31. El representante de España ha dicho que el comité cuya creación se propone se encontraría en una situación difícil, ya que tendría que dictaminar sin tener ningún texto en qué apoyarse. Aunque, en hipótesis, los pactos no serían aplicables, el comité podría siempre apoyarse en los principios esenciales enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

32. El Sr. Eustathiades reconoce que, como ha señalado el representante del Uruguay, existe una tendencia creciente a convertir al individuo en sujeto del derecho internacional. Así, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa reconocen la validez de los recursos individuales. No obstante, en cuanto a la aplicación práctica

conviene avanzar por etapas. Por ello el proyecto de resolución de Grecia sólo prevé las quejas formuladas por un Estado contra otro. Ello es lo que resulta actualmente más aceptable y realizable. Por otra parte, la delegación de Grecia actúa impulsada por el deseo de apaciguar los conflictos y de mejorar las relaciones internacionales. Tiene pues en cuenta necesariamente el hecho de que un Estado se dejaría llevar menos que un individuo a formular una denuncia contra otro Estado.

33. Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, el Sr. Eustathiades se reserva el derecho de examinar otros aspectos del problema en la sesión siguiente. Se limitará por el momento a responder a una observación del representante de El Salvador, con quien está de acuerdo. En conformidad con el proyecto de resolución de Grecia la Asamblea General no declararía competente a la Comisión de Derechos Humanos para examinar los casos concretos relativos a la observancia de los derechos humanos. Se limitaría a invitar a la Comisión de Derechos Humanos a que examine el problema y le informe al respecto.

Se levanta la sesión a las 13 horas.